

EL CASO DEL PROYECTO DE LA MINA DE COBRE DE LLURIMAGUA, ECUADOR

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DEBIDA DILIGENCIA MEDIOAMBIENTAL EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES



PIE DE IMPRENTA

AUTORES

Carlos Zorrilla (Decoin) / Johanna Sydow (Germanwatch e.V.)

EDITORAS

Anja Gebel, Rebecca Heinz, Cornelia Heydenreich (Germanwatch.e.V.)

FOTOS DE LA PORTADA

Atelopus longirostris (Credit: Carlos Zorrilla)

2006, paramilitaries hired by the Canadian Company Ascedent Copper, trying to gain access to the mining project (Credit: Elisabeth Weyth)

EDITADO POR

Germanwatch e.V.

OFICINA EN BONN

Kaiserstr. 201

D-53113 Bonn

☎ +49 (0)228 / 60 492-0, Fax -19

OFICINA EN BERLIN

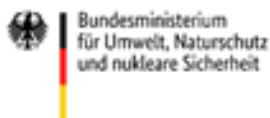
Stresemannstr. 72

D-10963 Berlin

☎ +49 (0)30 / 28 88 356-0, Fax -1

www.germanwatch.org | info@germanwatch.org

Patrocinado por



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Berliner Landeszentrale
für politische Bildung

Germanwatch es el único responsable del contenido.

Noviembre 2020



Observar. Analizar. Actuar.

Para la equidad global y la preservación de los medios de vida.

Breve resumen

Este estudio ilustra el caso de un potencial proyecto minero de cobre, *Llurimagua*, en la zona de Intag en Ecuador, ubicado en un bosque nublado caracterizado por su alta pluviosidad y su gran biodiversidad. En el presente texto se expone la historia de las empresas mineras en la región y, basándose en diferentes estudios científicos, el enorme impacto ambiental que tendría una operación de tales magnitudes. Además, también muestra que el gobierno no se asegura de que los intereses de la población local y del medio ambiente se tengan debidamente en cuenta en el contexto de la instalación de la mina, entre otras cosas, al intervenir con su propia empresa. Así mismo ilustra el conflicto de intereses económicos y de conservación a nivel nacional y cantonal.

En definitiva este estudio de caso muestra por qué es tan importante incluir la debida diligencia medioambiental en los marcos legales de debida diligencia y qué aspectos han de ser considerados a la hora de ponerla en práctica. Además, el autor Carlos Zorrilla esboza diferentes líneas rojas medioambientales, así como detallados criterios específicos que deben evaluarse en el contexto de una debida diligencia medioambiental. Esta evaluación también puede implicar que determinadas regiones tengan que ser declaradas como “zonas prohibidas”.

Contenido

1	Prefacio	5
2	Datos de interés sobre el proyecto	7
3	Antecedentes	8
4	Características de la región e impactos medioambientales que serán causados por la extracción de cobre	10
5	Medidas de precaución y monitoreo.....	12
6	Irregularidades y violaciones de los derechos humanos durante la fase de exploración de la empresa minera ENAMI	13
7	Conflicto legal entre los gobiernos nacional y cantonal - los derechos de la naturaleza	15
8	Defensa (legal) de los actores locales	17
9	Conclusión: lo que esto significa para las legislaciones de debida diligencia y las empresas	20

1 Prefacio

En los últimos años ha habido un debate vital sobre el concepto de debida diligencia en materia de derechos humanos que se deriva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos lanzados en 2011. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos proporcionan un marco para que las empresas ejerzan la debida diligencia en todas sus operaciones mundiales, lo que incluye: i) identificar y evaluar los impactos potenciales y reales sobre los derechos humanos; ii) integrar e implementar los resultados de la evaluación; iii) hacer un seguimiento y supervisar la implementación de las medidas para prevenir y mitigar los impactos; y iv) comunicar e informar sobre las medidas para prevenir y mitigar los impactos.

Desde entonces se han aprobado algunas legislaciones vinculantes en materia de debida diligencia que obligan a las empresas a evaluar y mitigar los riesgos relacionados con los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Muchas de ellas se centran en cuestiones específicas, como el trabajo infantil (Países Bajos), el trabajo en condiciones de esclavitud (Reino Unido), o la Legislación de la UE sobre Minerales de Zonas de Conflicto, que se refiere a varios minerales asociados a ciertos riesgos como lo son las peores formas de trabajo infantil, la prostitución forzada, la financiación de grupos armados, etc. Hasta la fecha hay pocas legislaciones en todo el mundo que se centren en todos los derechos humanos, con excepciones como la *Loi de vigilance* (Francia) que aborda todos los sectores (legislación horizontal de debida diligencia en materia de derechos humanos). Esta legislación es aún más amplia ya que también cubre la debida diligencia medioambiental que hasta la fecha, en la mayoría de las legislaciones, se sigue desatendiendo. En 2011, la Guía de la OCDE sobre Empresas Multinacionales y, de nuevo, en 2018, la Guía de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable destacaron la responsabilidad de las empresas también en relación con el medioambiente. Hasta ahora, como ya se ha mencionado, la debida diligencia en materia de medio ambiente ha sido difícilmente integrada en las legislaciones y aún carece de concreción comparada con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en lo que respecta a las responsabilidades de las empresas en materia, precisamente, de derechos humanos.

La debida diligencia en materia de derechos humanos capta la destrucción del medioambiente cuando está directamente relacionada con la violación de los derechos humanos, como, por ejemplo, un vertido tóxico que causa directamente la muerte o problemas de salud a la población. Pero está claro que sin una dimensión ambiental en las legislaciones de debida diligencia se puede presentar: 1) la destrucción de la biodiversidad, el clima y otros daños ambientales que no conducen directamente a abusos de los derechos humanos; y 2) que la destrucción que se acumula, y conduce a abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, a largo plazo sea muy difícil de abordar.

Actualmente se están elaborando varias legislaciones horizontales de debida diligencia, entre otras la de la Unión Europea. Esta legislación prevista pretende ser una legislación sobre derechos humanos y debida diligencia medioambiental. Como mostrará este estudio, la inclusión de la debida diligencia medioambiental es un paso crucial para evitar el desastre medioambiental y una mayor pérdida de biodiversidad. Demuestra también lo compleja que se vuelve la protección del medioambiente en los casos en que las instituciones gubernamentales son débiles y los propios gobiernos están interesados en la operación minera como tal.

A continuación se presentará, pues, el caso de Llurimagua en la región de Intag (Ecuador), con su potencial impacto severo en el medioambiente. Es un caso interesante en este sentido ya que el impacto potencial está bien documentado por una evaluación independiente de impacto ambiental realizada por el Estado japonés. El presente documento muestra la complejidad de las

diferentes legislaciones, los desafíos en los casos en los que el gobierno tiene intereses diferentes a los intereses cantonales, y los enormes impactos ambientales que se producen durante la etapa inicial de las operaciones mineras (en su mayoría ocurren en el momento en el que los contratos de suministro aún no se han establecido). Esto plantea retos especiales para la diligencia medioambiental de las empresas de suministro y los productores de maquinaria que suministran equipos a una mina.

Después de presentar el caso, el autor Carlos Zorrilla¹ expone diferentes líneas rojas y aspectos a tener en cuenta antes de empezar a explotar una mina y antes de empezar a comprar minerales de la misma. Carlos Zorrilla ha sido parte de la resistencia contra los proyectos mineros en la región de Intag desde hace 25 años. Trabaja con la ONG Decoin y ha participado en la lucha contra las operaciones mineras en Intag para proteger la naturaleza única de la zona durante los últimos 26 años. También ha contribuido a la puesta en marcha de iniciativas y empresas que proporcionan ingresos económicos alternativos a la minería y ha reunido muchos conocimientos sobre los procesos en torno a la puesta en marcha de las minas y su impacto en el medioambiente, con los que contribuye a este trabajo. No en vano viajó a Alemania en 2019 para pedir a un productor de automóviles que presione a una empresa minera que quiere explotar en Intag para que se retire de su operación en la región².

Para concluir el documento, vincularemos el estudio de caso con el debate sobre la debida diligencia medioambiental. Con ello queremos contribuir a la discusión sobre la debida diligencia medioambiental, mostrar su importancia y mapear los elementos relevantes con los que deberíamos seguir pensando al seguir conceptualizando dicha diligencia.



¹ Entre otras cosas debido a las dificultades con las medidas judiciales, en la larga historia del proyecto minero en la región diferentes ONGs, junto con miembros de la comunidad, han implementado docenas de medidas adicionales para detener la minería en su área. Entre las más efectivas se encuentran: la participación de organizaciones de derechos humanos para monitorear la situación y capacitar a las comunidades sobre sus derechos humanos y colectivos frente a las empresas; la elaboración de un manual para las comunidades con ideas sobre cómo enfrentar a las empresas de manera pacífica; el impulso por parte de los ciudadanos para la creación de dos leyes cantonales (Ordenanzas) para detener la degradación del medioambiente incluyendo la detención de la minería; la generación de alternativas productivas a la minería (incluyendo el ecoturismo y la producción de café orgánico); la toma de medidas de resistencia por parte de los miembros de la comunidad, incluyendo la obstaculización física del acceso de los empleados de las empresas a las concesiones mineras, el cierre de caminos; la denuncia constante en el exterior sobre las acciones de las empresas y los riesgos ambientales.

² En definitiva, hay que decir que la minería del cobre es destructiva mientras que, al mismo tiempo, los actuales desarrollos tecnológicos hacia las energías renovables, la e-movilidad y una creciente digitalización exigen más cobre. La reducción, la reutilización y el reciclaje de alta calidad tienen que estar en el centro de esta transición tecnológica para disminuir la necesidad de cobre, entre otros, tanto como sea posible.

2 Datos de interés sobre el proyecto

Antecedentes y estado de las operaciones	<p>El actual proyecto minero Llurimagua constituye el tercer intento de establecer actividades mineras en la región. La fuerte resistencia de la población local obligó a una empresa minera japonesa y a otra canadiense a abandonar la zona.</p> <p>En 2011 el actual proyecto minero fue desarrollado por una empresa conjunta de la compañía minera nacional ecuatoriana ENAMI (51%) y la compañía minera nacional de Chile CODELCO (49%). Las exploraciones iniciales han finalizado. La aprobación del estudio de impacto ambiental para ampliar la exploración todavía está pendiente</p> <p>En los próximos cuatro años se invertirán unos 250 millones de dólares en el proyecto de llegar a una decisión sobre la construcción de la mina, esto podría hacer que Llurimagua produjera 210.000 toneladas de cobre al año durante 27 años.</p>
Características de la región	<p>La región de Intag, donde se ubica el proyecto minero, forma parte de los Andes Tropicales, el foco (hotspot) más importante de los 36 focos (hotspots) de Biodiversidad del planeta. Existen 279 especies animales en peligro de extinción, que están en la Lista Roja de la UICN y que están amenazadas por el proyecto Llurimagua. La región se caracteriza por su alta pluviosidad y por la superabundancia de aguas subterráneas..</p>
Consecuencias previstas de la extracción de cobre	<p>Las 4.839 hectáreas de la concesión de Llurimagua se caracterizan por una enorme diversidad de especies. Si el proyecto Llurimagua pasa a la fase de explotación, podría significar la deforestación de miles de hectáreas de bosques primarios que albergan especies endémicas y en peligro de extinción; contaminaría ríos prístinos con metales pesados; destruiría vestigios arqueológicos preincaicos; y obligaría a reubicar entre cuatro y seis comunidades. Además, la región se caracteriza por la alta pluviosidad y la superabundancia de aguas subterráneas, lo que incrementa el riesgo de drenaje ácido de las minas..</p>
Sentencia contra el proyecto minero basada en los derechos de la naturaleza	<p>En un juicio a nivel cantonal sobre la legalidad del proyecto³, un juez recientemente falló a favor de los derechos de la naturaleza por encima del interés empresarial, dando a los demandados —el Ministerio de Medio Ambiente y el Fiscal General de la Nación— tres meses para subsanar las ilegalidades e irregularidades detectadas en la primera fase de la exploración. Este proceso será supervisado por grupos de la sociedad civil, incluidas las universidades. El Ministerio de Medio Ambiente inmediatamente apeló la sentencia.</p>

³ El juez concedió una acción de protección de los derechos garantizados en la Constitución ecuatoriana. Véase, por ejemplo, Rainforest Action Group (26 de septiembre de 2020): “Major legal victory for endemic species in Ecuador Rights of Nature case”. <https://rainforestactiongroup.org/major-legal-victory-for-endemic-species-in-ecuador-rights-of-nature-case>

3 Antecedentes

Dos intentos de extracción de cobre por parte de empresas internacionales

Junín es una comunidad situada en Intag con una extensión de 1.500 km² de bosques nublados y fincas en el noroeste de Ecuador (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura). En los años 80, el gobierno de Bélgica apoyó a Ecuador en la identificación de zonas con potencial minero. El cantón de Junín, en la provincia de Imbabura, es una de estas zonas donde se identificó la presencia de cobre. En los años 90, el gobierno ecuatoriano solicitó ayuda al gobierno japonés para explorar la zona y determinar su potencial. Bishimetals, una filial de Mitsubishi Corporation, recibió financiación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para explorar los minerales de Junín. Los japoneses confirmaron la presencia de un yacimiento de cobre y molibdeno en la zona del proyecto Junín-Cuellaje, situado en medio de la excepcional biodiversidad de la cordillera de Toisán, pero no pudieron completar la exploración debido a la oposición de las comunidades locales y del gobierno, y la exploración se dio por terminada en 1997. Entre los motivos de las protestas estaban los resultados de un Estudio de Impacto Ambiental financiado por la *Agencia de Cooperación Internacional del Japón*. El estudio identificó los graves impactos que una mina causaría en esta zona.

En 2004, la empresa canadiense Ascendant Copper adquirió la concesión e intentó reactivar la exploración, pero la oposición de las comunidades no permitió que la empresa entrara siquiera en la concesión minera para continuar las exploraciones y evaluar la viabilidad económica del yacimiento. En 2009 Ascendant Copper (ahora "Copper Mesa Mining Corporation") se vio obligada a abandonar Intag debido a la fuerte resistencia de la población, tras lo cual la empresa demandó al Estado para obtener una indemnización. Como consecuencia, en 2018 el gobierno ecuatoriano tuvo que pagar 20 millones de dólares a la empresa para poner fin a la disputa legal en un tribunal de arbitraje.⁴

Tercer y actual intento: la empresa nacional minera ecuatoriana ENAMI y la empresa nacional minera chilena CODELCO entran en la región

En 2011, el gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo con Chile por el que se autorizaba a la empresa estatal chilena, CODELCO, junto con la recién creada Empresa Nacional de Minería del Ecuador, ENAMI, a desarrollar varios proyectos mineros, entre ellos el proyecto "Llurimagua". Este fue el nombre que se le dio al mismo proyecto que, durante décadas, fue conocido como Junín, para de esta forma separarlo del anterior fracaso ocurrido por parte de las dos empresas transnacionales en el desarrollo del proyecto. En 2014, el Ministerio de Ambiente aprobó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental para la explotación geológica del proyecto minero (desarrollado por la empresa ENTRIX y contratado por la propia ENAMI). Protegidas por cientos de policías, las empresas accedieron a la concesión minera para iniciar la exploración avanzada, afectando una zona rica en restos arqueológicos, bosques primarios y ríos prístinos. El proyecto se encuentra todavía en la fase de prefactibilidad⁵, es decir, la fase para evaluar la rentabilidad de la mina de cobre. CODELCO ya ha invertido unos 60 millones de dólares en el proyecto desde 2012, perforando 98 pozos. La

⁴ UNCTAD. Investment Dispute Settlement Navigator: "Coper Mesa v. Ecuador, Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador (PCA No. 2012-2)". <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/436/copper-mesa-v-ecuador>

⁵ El Oriente/Mining Journal (13.01.2020): "Llurimagua, una decisión posible en 2023". <https://www.eloriente.com/in-dex.php/articulo/llurimagua-una-decision-posible-en-2023/13716>

capacidad de la mina se estima en 3.8 billones de toneladas de mineral con una graduación del 0,44% que contiene 16,9 Mt de cobre⁶.

La primera fase de exploración avanzada finalizó en 2018, y en enero de 2019 se propuso una ampliación de la exploración avanzada con 160 nuevas perforaciones en una zona rica en bosques primarios y secundarios. Sin embargo, a partir de octubre de 2020, las empresas no han podido reiniciar la exploración por diversas razones: impactos de la pandemia, disensos sobre la mejor forma de crear una nueva empresa y sobre el valor del yacimiento; la no aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación de la exploración. Un informe de la Contraloría General, órgano de control del gobierno, confirmó que hubo muchas irregularidades y violaciones de la ley en la fase de exploración.⁷



Imagen: Carlos Zorrilla

⁶ Mining Journal (13.02.2020): "New ENAMI boss with Llurimagua headache to sort out".
<https://www.miningjournal.com/copper-news/news/1380966/new-enami-boss-with-llurimagua-headache-to-sort-out>
(Visitado el 31 de octubre de 2020).

⁷ Contraloría General del Estado. (2019): "DNA6 – Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales".
<https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&tipo=inf>

4 Características de la región e impactos medioambientales que serán causados por la extracción de cobre

Varios estudios científicos y diferentes estudios de impacto ambiental han contribuido en gran medida al conocimiento de las características de la zona y de los posibles impactos de una extracción de cobre. Cabe destacar en este contexto que el primer estudio de impacto ambiental de 1996, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón⁸, es importante: por un lado, porque aportó mucha información sobre el posible impacto de la explotación minera, y por otro porque fue elaborado por una institución independiente. Los aspectos que a continuación se señalan podrían implicar graves impactos ambientales para el caso de la extracción minera.

Alta pluviosidad y alto riesgo de drenaje ácido de minas

La precipitación anual en Intag varía entre 1.000 y 3.000 mm en promedio. En la temporada de lluvias, o bajo la influencia del fenómeno de El Niño, las precipitaciones son aún mayores.⁹ Las fuertes lluvias, junto con los abundantes acuíferos subterráneos presentes en Intag y con los metales pesados propios del mineral, hacen una mezcla mortal.¹⁰ Esto no sólo aumenta los riesgos de desastres causados por el hombre, como los deslizamientos de tierra¹¹, sino que también resulta propenso de generar drenajes ácidos de mina. En lugares como donde se propone la mina de Junín hay una superabundancia de agua subterránea (según la Evaluación de Impacto Ambiental japonesa - EIA). Para la creación de grandes pozos para extraer el mineral hay que desviar o secar arroyos y acuíferos para que el pozo de la mina no se llene de agua. Si el agua se bombea desde el interior del pozo, como será inevitable dada la elevada pluviosidad y las filtraciones, es probable que el agua se contamine con metales pesados como consecuencia del drenaje ácido de las minas. Este fenómeno químico es muy difícil de controlar, sobre todo cuando los compuestos de azufre del mineral y la roca desgastada entran en contacto con el aire y el agua. El azufre acidifica el agua, que a su vez lixivia los metales pesados de los residuos, sumado todo ello al subsuelo igualmente contaminado que se encuentra entre el nivel del suelo y el del mineral. Una vez iniciado el proceso, la acidez puede tardar miles de años en neutralizarse. Hay una docena de ríos en la zona de concesión, y el estudio de impacto ambiental japonés determinó que corrían un alto riesgo de contaminación por metales pesados, y predijo que los niveles de concentración eran hasta 100 veces superiores a los que normalmente se encuentran en el suelo.

Condiciones geográficas y geológicas

La zona en la que se ha detectado el cobre es excepcionalmente escarpada y montañosa, lo que hace que la extracción sea mucho más difícil y costosa que en la mayoría de las otras minas. Esto se puso de manifiesto en la última evaluación de impacto ambiental para la ampliación de las

⁸ Ver Japan International Cooperation Agency (1996): "Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junín y Cuellaje, República del Ecuador". https://openjicareport.jica.go.jp/661/661/661_706_11282761.html

⁹ Kocian, M., Batker, D., & Harrison-Cox, J. (2011): "An Ecological Study of Ecuador's Intag Region: The Environmental Impacts and Potential Rewards of Mining". Earth Economics, Tacoma, WA.

¹⁰ Ver Japan International Cooperation Agency (1996): "Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junín y Cuellaje, República del Ecuador". https://openjicareport.jica.go.jp/661/661/661_706_11282761.html

¹¹ Deslizamientos de tierra o rotura de presas de Baker, como ocurrió en enero de 2019 en Brumadinho (Brasil), cuando al menos 237 personas murieron por la rotura de una presa en una mina de hierro. Ver Philipp, D. (2020): "Brazil prosecutors charge 16 people with murder in dam collapse that killed 270". The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/brazil-dam-collapse-mining-disastercharges>

actividades de exploración que se hizo pública en enero de 2019. La evaluación de impacto ambiental japonesa de 1996 también incluye indicaciones claras de que el cobre de Junín es muy profundo, lo que hace que la minería sea mucho más destructiva para el medio ambiente y económicamente arriesgada. La Cordillera de Toisán, y el norte de los Andes en general, tienen muchas fallas geológicas, lo que supone un riesgo sísmico importante. De hecho, la EIA de 2019 clasifica la zona como situada en una región que corre un riesgo sustancial de sufrir un evento sísmico importante cada 10 años.

Biodiversidad

El noroeste de Ecuador, donde se ubica el proyecto minero, forma parte de los Andes Tropicales, y se encuentra entre los 36 focos (*hotspots*) de biodiversidad más importantes del planeta.¹² En 2018, los investigadores identificaron 279 especies de animales en peligro de extinción¹³, que aparecen en la Lista Roja de la UICN, dentro o cerca de los bosques ahora amenazados por el proyecto Llurimagua. Cientos de otras especies podrían añadirse a las listas rojas de Ecuador, muchas de ellas en peligro crítico. Sin embargo, esto aún no incluye las dos especies de ranas endémicas recientemente encontradas que existen dentro de la concesión minera y en ningún otro lugar del mundo. A principios de 2018, los biólogos que preparan el nuevo Estudio de Impacto Ambiental para la empresa ENAMI¹⁴, identificaron tres especies en peligro crítico de extinción, incluyendo un mono araña. El proyecto Llurimagua elevaría su riesgo de extinción de forma dramática.

Además, en un contexto más amplio, la mina de cobre y otros proyectos mineros previstos en la región tendrían un impacto masivo en las condiciones climáticas regionales, esto provocado por una deforestación masiva y la manipulación del sistema hidrológico, según la evaluación de impacto japonesa.¹⁵ Esto tendría graves consecuencias no sólo para la agricultura y el potencial ecoturístico de la región, sino también para la integridad del ecosistema andino a gran escala.¹⁶ La región de Intag es un corredor esencial para el Área de Conservación de Cotacachi. Debido al gran número de concesiones mineras, Cotacachi corre el riesgo de convertirse en una isla rodeada de minas. También por causa del aumento del aislamiento y de los efectos de borde, como la desecación del bosque, las islas están perdiendo biodiversidad. Además, los corredores proporcionan un importante vínculo entre las regiones bajas y las elevaciones andinas más altas, una importante ruta de migración para que muchas especies se adapten a las condiciones cambiantes del cambio climático¹⁷. Adicional a ello, y debido a las condiciones físicas y a la

¹² Mittermeier, R.A., Gil, P.R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., et al. (2000): "Hotspots Revisited: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Conservation International". Washington D.C.

¹³ Roy, B. A., Zorrilla, M., Endara, L., Thomas, D. C., Vandegrift, R., Rubenstein, J. M., et al. (2018): "New Mining Concessions Could Severely Decrease Biodiversity and Ecosystem Services in Ecuador". *Tropical Conservation Science*, 11, pp. 1-20. <https://doi.org/10.1177/1940082918780427>

¹⁴ EntrixINC (2014): "Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera N° 403001 Llurimagua".

¹⁵ Ver Japan International Cooperation Agency (1996): "Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junín y Cuellaje, República del Ecuador". https://openjicareport.jica.go.jp/661/661/661_706_11282761.html

¹⁶ Impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de 1996, redactado por técnicos japoneses. Ver: Japan International Cooperation Agency (1996): "Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junín y Cuellaje, República del Ecuador". https://openjicareport.jica.go.jp/661/661/661_706_11282761.html Acerca de la contaminación del agua también se puede ver: Sacher, W & Chopard, A. (2017): "Megaminería y agua en Intag: una evaluación independiente. Análisis preliminar de los potenciales impactos en el agua por la explotación de cobre a cielo abierto en Junín, zona de Intag, Ecuador". https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador

¹⁷ Báez, S., Jaramillo, L., Cuesta, F., & Donoso, D. A. (2016): "Effects of climate change on Andean biodiversity: a synthesis of studies published until 2015". *Neotropical Biodiversity*, 2(1), pp. 181-194. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23766808.2016.1248710>

topografía, un experto geólogo estadounidense predijo que un desastre ambiental de grandes proporciones se produciría inevitablemente debido a la ubicación y gestión de los relaves.¹⁸

5 Medidas de precaución y monitoreo

Medidas cautelares actuales de la empresa

Durante la fase de exploración, las dos empresas responsables adoptaron diferentes medidas para mitigar los impactos negativos sobre el medioambiente. Aunque el titular de la concesión, en este caso ENAMI, fue la principal entidad responsable de las medidas, las dos empresas actuaron conjuntamente. Se reforestaron las zonas degradadas con especies autóctonas, no se obstruyeron los arroyos con escombros, se utilizaron sustancias biodegradables en las perforaciones, se minimizó el aprovechamiento de la mayor parte de los senderos en el bosque, se utilizó maquinaria y materiales transportados por personas o mulas, y se transportaron materiales peligrosos y residuos generales fuera de la zona minera. Los empleados recibieron formación sobre la prohibición de cazar y recolectar plantas y animales.

Al mismo tiempo las empresas crearon y financiaron un grupo de control medioambiental, formado por personas de las comunidades situadas en la zona de impacto directo e indirecto, que se encarga principalmente de controlar la calidad del agua. Algunos miembros del grupo son también empleados de la empresa. Cada seis meses llevan a cabo las evaluaciones de seguimiento medioambiental que exige el Estudio de Impacto Ambiental. Antes de realizar el seguimiento, la empresa les pidió que llevaran a cabo un proceso de formación. Y adicional a todo ello son los encargados de informar sobre los resultados obtenidos, principalmente, a la comunidad.

Los miembros de la comunidad critican que las muestras son tomadas en lugares que no sufren impactos y que la empresa puede decidir por sí misma cómo realizar y diseñar el seguimiento. No hay un control independiente para verificar si el seguimiento se realiza de manera correcta. Hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente no ha considerado necesario verificar el cumplimiento efectivo y fiel de las medidas implementadas por la empresa, por ejemplo, mediante inspecciones periódicas. Esto también es criticado por el informe de la Contraloría General del Estado.¹⁹

Monitoreo por parte de la comunidad

Para garantizar el monitoreo independiente de las acciones de exploración, los posibles daños o el cumplimiento adquirido, se formó un grupo de monitoreo comunitario como alternativa independiente al grupo de monitoreo organizado por la empresa. Los criterios de selección de este grupo fueron similares a los del grupo de monitoreo creado por la empresa, estos son: la voluntad de dedicar tiempo al trabajo y la realización de una capacitación por parte de un PhD en ciencias atmosféricas con amplios conocimientos en geología. El grupo vigila principalmente la calidad del agua y patrulla la zona minera durante cualquier actividad de extracción. Los resultados del seguimiento son públicos y se han utilizado en procedimientos judiciales contra el proyecto minero. Estos demuestran la existencia de contaminación del agua, a pesar del compromiso de la empresa

¹⁸ Al resto de problemas e incertidumbres relacionadas con el proyecto minero se suman los inconcebibles retos geofísicos y medioambientales de la zona minera, lo que permitió que el geólogo norteamericano Steven Emerman, de la consultora Malach, concluyera en 2020 que Llurimagua es el proyecto más peligroso que ha evaluado. Ver <http://codelcoecuador.com/2019/11/11/codelco-fuera-de-intag/>.

¹⁹ Contraloría General del Estado (2019): "DNA6 – Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales". <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&tipo=inf>

de reciclar y tratar el agua. El grupo de seguimiento de la comunidad descubrió y documentó cómo el agua de los pozos de exploración se vertía a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, un problema importante de este grupo es que el trabajo realizado por sus participantes rara vez es remunerado. El grupo recibe financiación de ONG's y ha trabajado con el gobierno cantonal, pero carece de una fuente de financiación estable.

Para llevar a cabo su trabajo de supervisión, el grupo de monitoreo comunitario necesita obtener libre acceso a toda la concesión minera sin ningún impedimento por parte de la empresa para realizar las actividades de verificación. En el caso de Llurimagua, el acceso no es totalmente libre ya que está controlado por la empresa. Sin embargo, gracias a la presión social, ha sido posible acceder a la concesión minera en la mayoría de las ocasiones²⁰.

6 Irregularidades y violaciones de los derechos humanos durante la fase de exploración de la empresa minera ENAMI

Durante la fase de exploración avanzada se violaron diferentes derechos de la población local.

Según un informe de la Contraloría General del Estado²¹ el derecho a la consulta previa fue el primer derecho violado, ya que las comunidades, hasta la fecha, no han sido consultadas en un proceso formal de consulta. El derecho a la consulta previa está estipulado tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como en la Constitución de la República del Ecuador.²² Mientras la Declaración se refiere al derecho de los pueblos indígenas, la Constitución prevé el derecho de todas las comunidades a una consulta ambiental.²³ La realización de las consultas es tarea del Estado, por lo que antes de iniciar la exploración, las autoridades estatales competentes tendrían que haber invitado a las comunidades afectadas y a los gobiernos locales a discutir el proyecto, a identificar los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales importantes para evitar sus impactos, a documentar sus objeciones y críticas, así como sus propuestas para prevenir o mitigar estos riesgos, y luego actuar en función de ellas y de

²⁰ Observación de Carlos Zorrilla.

²¹ Contraloría General del Estado (2019): "DNA6 – Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales". <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57938&tipo=inf>

²² En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 57, numeral 7, se reconoce que las comunas, comunidades, pueblos y naciones indígenas tienen el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, en un plazo razonable, sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; a participar en los beneficios que estos proyectos traigan consigo y a recibir una indemnización por los daños sociales, ambientales y culturales que se les causen. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula en su artículo 32 (2) que "los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación". También ver: Defensoría del Pueblo de Ecuador: "Consentimiento libre, previo e informado en el Ecuador: Aportes al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas". https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/FPIC/Ecuador_NHRI.pdf

²³ Defensoría del Pueblo de Ecuador: "Consentimiento libre, previo e informado en el Ecuador: Aportes al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas". https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/FPIC/Ecuador_NHRI.pdf p.9

las acciones de las empresas. Esto no se hizo. El gobierno argumentó que no había Pueblos Indígenas y por eso no se consultó, pese a que la Constitución de Ecuador prevé una consulta ambiental para todas las comunidades.²⁴ Además, a pesar de su importancia, ni la comunidad local ni los gobiernos subnacionales participaron en la identificación de los elementos que debían incluirse en los Estudios de Base e Impacto Ambiental, o en estudios similares, para evitar impactos negativos en la comunidad y su entorno. En el caso de Llurimagua, las entidades estatales no cumplieron con sus obligaciones legales.

Lo que se realizó en cambio entre 2012 y 2019, por parte de representantes de la empresa estatal ENAMI, titular de la concesión, fueron reuniones (no consultas²⁵) con las comunidades del área de influencia indirecta, y algunas del área de influencia directa, para "socializar" mejor el proyecto. En estos procesos, ENAMI explicó a los pobladores las actividades y objetivos de las fases de exploración. Sin embargo, estos procesos han sido deficientes ya que la información sobre el proyecto se presentó de manera sesgada y no objetiva. Sólo se presentaron los aspectos positivos de la exploración (y los beneficios de la futura mina), especialmente las oportunidades de empleo para las personas que buscan trabajo²⁶, mientras que no se invitó a ninguna persona u organización que pudiera informar sobre los posibles impactos negativos de las operaciones.²⁷

Por ejemplo, cuando las empresas socializaron el Estudio de Impacto Ambiental con las comunidades, evitaron mencionar la presencia de especies en peligro de extinción y la alta probabilidad de contaminación del agua, aspectos que se destacaban en el estudio. Otros aspectos quedaron muy vagos: por ejemplo, los representantes de las empresas dijeron que reciclarían el agua, que se reforestaría con especies autóctonas, y que la basura se trasladaría fuera de la zona minera, pero no detallaron cómo se llevarán a cabo estas actividades. Aunque las empresas han colaborado con la comunidad entregando otros documentos habilitantes sin mayores obstáculos, el Estudio de Impacto Ambiental fue presentado únicamente sin sus anexos^{28, 29}.

En el proceso de socialización de 2019, tanto las empresas como el Ministerio del Medio Ambiente llegaron a dar la impresión de que trataban de impedir la participación y eventual crítica de la población local en el proceso de socialización. Un Estudio de Impacto Ambiental Complementario y un Plan de Manejo Ambiental fue presentado para legitimar la ampliación de la exploración del proyecto Llurimagua. El estudio de 1.500 páginas, repleto de términos técnicos e información

²⁴ Véase el Informe del Contralor General nota al pie número 24.

²⁵ La consulta previa presupone que la entidad consultora, ya sea el Estado o una empresa: a) invite previamente a los miembros de la comunidad y a las organizaciones productivas y ambientales locales; b) se asegure de que haya diversidad de opiniones y de género en las consultas; c) anime a las comunidades y a los gobiernos subnacionales a invitar a expertos en la materia y a entidades independientes de derechos humanos (Defensoría del Pueblo y ONG's). Las consultas deben realizarse de buena fe, es decir, sin la intención de engañar o presionar a las poblaciones con el único fin de obtener la "aprobación" o licencia social. El propósito de las consultas no es obtener la aprobación de aquellos a quienes se consulta, sino comprender y respetar los deseos de las comunidades para determinar su propia visión de modo de vida y el tipo de desarrollo que desean. Y esto sólo se consigue cuando los actores consultados comprenden plenamente cuáles serían los impactos sociales, culturales y medioambientales de la(s) actividad(es) propuesta(s) a corto, mediano y largo plazo. También implica que los representantes de la comunidad participen en la identificación de los elementos naturales, culturales y/o espirituales que no deben ser afectados por las actividades de extracción. Es fundamental que los pactos o acuerdos empresa-comunidad, en caso de llevarse a cabo, tengan que ser aprobados en asambleas públicas y participativas, con representación de toda la comunidad, y no sólo por los individuos, generalmente hombres, que serían los más beneficiados por las actividades propuestas. En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el artículo 57, número 7, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y naciones indígenas el derecho colectivo a la consulta previa. Véase también la nota nº 25 de este documento para más detalles.

²⁶ Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (26.11.2014): "Aprueban estudio de impacto ambiental para explotación minera en Intag". <http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104987>

²⁷ Carlos Zorrilla participó en una reunión de este tipo y observó lo mencionado.

²⁸ Observado por Carlos Zorrilla.

²⁹ Carlos Zorrilla realizó seguimiento del proceso.

extremadamente compleja, fue presentado en diferentes oficinas durante solo tres días y únicamente en formato digital, cuando muy pocas personas de las comunidades tienen ordenadores en sus casas. Adicional a ello, el Ministerio de Medio Ambiente sólo concedió 15 días para recibir comentarios del público, cuando legalmente debería haber concedido 30 días.³⁰

Parte de la población rechazó la presencia de las empresas, criticando el proceso y alegando que muchos de los presidentes de las comunidades del sector son empleados de la compañía, o esperan su regreso al trabajo cuando se reanuden los trabajos de exploración, por lo que intentaron movilizar a decenas de personas para que visitaran los centros de información y firmaran en apoyo a la ampliación, sin haber leído el estudio.³¹

Otros derechos violados durante la fase de exploración del proyecto Llurimagua incluyen el derecho a la libre circulación y a la libertad. El derecho a la libre circulación de los pobladores se vio afectado durante dos meses en toda la zona de Intag por la ocupación ilegal de unos 400 policías y militares en mayo de 2014, justificada como una medida de seguridad para proteger a los empleados de la empresa e ingresar a la concesión minera mientras se realizaba la evaluación de impacto ambiental.³²

Por último, pero no menos importante, el caso de Javier Ramírez atrajo la atención internacional. El derecho a la libertad del activista en defensa de los derechos ambientales se vio afectado cuando, en 2014, fue procesado por atentar contra el personal y los bienes de Enami (acción en la cual no participó), arbitrariamente detenido y encarcelado durante 10 meses sin ninguna sentencia. Tras las protestas nacionales e internacionales no fue absuelto, sino condenado en un proceso político a una pena de diez meses por "rebelión".³³

7 Conflicto legal entre los gobiernos nacional y cantonal - los derechos de la naturaleza

Además de reconocer y respetar los resultados de las consultas previas sobre los proyectos mineros, la Constitución ecuatoriana obliga a los organismos estatales a tener en cuenta y evaluar los planes de desarrollo y las opiniones de los gobiernos subnacionales y de las comunidades, antes de otorgar concesiones mineras. El gobierno cantonal de Cotacachi tiene dos leyes de conservación del medio ambiente que prohíben la minería. Al mismo tiempo, la Constitución reconoce el derecho de "uso de la tierra" a los gobiernos cantonales, y a planificar el desarrollo dentro de sus jurisdicciones. Obviamente, la minería implica impactos en el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el desarrollo local, cuestiones que son responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Por lo

³⁰ Comisión Ecuamélica de DDHH: "Comuneros rechazan socialización para ampliar minería en Intag". <https://www.cedhu.org/noticias/13-noticias-cedhu/101-mineria-intag>

³¹ Comisión Ecuamélica de DDHH: "Comuneros rechazan socialización para ampliar minería en Intag". <https://www.cedhu.org/noticias/13-noticias-cedhu/101-mineria-intag>

³² Defensoría del Pueblo (2019): "Resolución No. 003-DPE-DNDCNA-2019". Quito. pp. 48 y siguientes. También ver: Carta de Política Nacional a los militares ecuatorianos del 14 de junio de 2016.

³³ Ver: Frontline defenders: "Historia del caso: Darwin Javier Ramírez Piedra". <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/historia-del-caso-darwin-javier-ramirez-piedra> También ver: Business & Human Rights Resource Centre (03.03.2009): "Copper Mesa Mining lawsuit (re Ecuador)". <https://www.businesshumanrights.org/en/latest-news/copper-mesa-mining-lawsuit-re-ecuador/> También ver Rettet den Regenwald e.V. (25.02.2015): "Erfolg: Ecuador: Javier Ramírez ist frei". <https://www.regenwald.org/erfolge/6390/ecuador-javier-ramirez-ist-frei> Y ver también El Comercio (19.02.2015): "La sentencia de Javier Ramírez sentó un precedente en el valle de Intag". <https://www.elcomercio.com/actualidad/intag-javier-ramirez-mineria-detencion.html> También se puede ver la nota anterior de la Defensoría del Pueblo.

tanto, la principal herramienta legal de la que disponen los gobiernos subnacionales (cantonales) que podría aplicarse contra el proyecto minero es denegar los permisos de cambio de uso del suelo.

Sin embargo, el gobierno nacional, a través de la empresa minera nacional ENAMI y del Ministerio de Medio Ambiente, no respeta estas leyes, o dice que no son aplicables, ya que considera que, de acuerdo con los poderes otorgados al gobierno nacional en la Constitución, los gobiernos subnacionales no tienen jurisdicción sobre los recursos minerales. Se basa en un artículo de la Constitución que otorga la exclusividad al gobierno nacional de la gestión y administración del recurso del subsuelo.

En el pasado, el gobierno cantonal presentó varias medidas constitucionales para intentar detener el proyecto minero. La última de estas medidas se presentó en agosto de 2020 basada en la violación de los Derechos de la Naturaleza (ver recuadro) con el apoyo de la ONG local "Decoin"³⁴, que obtuvo una sentencia favorable en primera instancia el 24 de septiembre del mismo año. El tribunal falló a favor de los Derechos de la Naturaleza sobre los derechos económicos de las empresas mineras, dando a los demandados —el Ministerio de Medio Ambiente y el fiscal general— tres meses para subsanar las ilegalidades e irregularidades detectadas en la primera fase de exploración. Este proceso será supervisado por una serie de grupos de la sociedad civil, incluyendo universidades. La sentencia ha sido apelada inmediatamente por el Ministerio de Medio Ambiente.

Otro proceso legal que se ha iniciado se basa en la falta de consulta y en los Derechos de la Naturaleza, pues se afectaría a un bosque protegido (área protegida). Es más que probable que en el futuro se presenten otras acciones constitucionales basadas en la posible violación de los Derechos de la Naturaleza, dados los graves y permanentes impactos producidos por la minería. La debida diligencia ambiental podría fortalecer la aplicación del Derecho de la Naturaleza al ejercer una mayor presión sobre las empresas proveedoras para que se abastezcan de minerales que cumplan con la normativa ambiental (esto se encuentra más detallado en la conclusión)³⁵.

Excurso: Los derechos de la naturaleza en el contexto del extractivismo

Los derechos de la naturaleza constituyen un concepto que ha ganado aceptación en todo el mundo (incluida Europa³⁶). En términos generales se trata del reconocimiento de que todos los componentes de la Naturaleza son sujetos de derechos. Ecuador fue el primer país del mundo en incorporarlos a su Constitución (Art. 71-74), pero los tribunales de varios otros países se han pronunciado a favor del respeto de los derechos de, por ejemplo, los ríos y las montañas³⁷. El artículo 71 de la Constitución ecuatoriana reconoce que la naturaleza “tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,

³⁴ Zorrilla, C. (2020): “Major legal victory for endemic species in Ecuador and the Rights of Nature”. <https://www.decoin.org/>
Para más información puede verse también: London Mining Network (2020): “Right of Nature an effective tool for mining resistance”. <https://londonminingnetwork.org/2020/12/rights-of-nature-an-effective-tool-in-mining-resistance/>

³⁵ Véase el requisito mínimo en relación con la legislación de debida diligencia en materia de medio ambiente: Krebs, D., Klinger, R., Galihofer, P., Scherf, S.C. (2020): “Von der menschenrechtlichen zur umweltbezogenen Sorgfaltspflicht. Aspekte zur Integration von Umweltbelangen in ein Gesetz für globale Wertschöpfungsketten”. Umweltbundesamt, p. 49. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbezogene-sorgfaltspflichten>. (p 38)

³⁶ Ver por ejemplo: Schoukens, H. (2020): “Rights of Nature in the European Union: Contemplating the Operationalization of an Eco-Centric Concept in an Anthropocentric Environment?”, pp. 205-234. In: Pereira J., & Saramago A. (eds) *Non-Human Nature in World Politics. Frontiers in International Relations*. Springer, Cham. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-49496-4_11

³⁷ Ver por ejemplo: Knauß, S. (2018): “Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India”. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31(6), pp. 703–722. También ver: O'Donnell, E. L., & J. Talbot-Jones (2018). “Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India”, *Ecology and Society*, 23(1), pp. 7.

estructura, funciones y procesos evolutivos”. Si un proyecto minero amenaza con inhibir o interrumpir los ciclos vitales de ciertas especies, por ejemplo, “[t]oda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. A pesar de ello, en Ecuador se ha violado muchas veces este derecho y se ha criminalizado bastante a activistas que luchaban por el medio ambiente. Sin embargo, en el presente caso el derecho de la naturaleza fue recientemente la base de una sentencia contra la minería. En septiembre de 2020, un juez de Cotacachi dictaminó que si el gobierno no puede demostrar que puede proteger adecuadamente a las especies amenazadas de extinción, los permisos de minería serán revocados.³⁸

8 Defensa (legal) de los actores locales

Antes de los casos legales mencionados en el contexto de la exploración de ENAMI y Codelco, se han producido otras disputas legales que hacen referencia a la legislación fuera de Ecuador. Esto ocurrió cuando la empresa canadiense quiso iniciar las exploraciones a principios de los años 20. Aquí los actores locales de Intag, entre ellos Decoin, presentaron una demanda contra la Bolsa de Valores de Canadá por violaciones a los derechos humanos (lo que sentó un precedente legal). El argumento principal fue que la Bolsa de Valores de Toronto —a pesar de haber sido advertida de que la empresa minera Copper Mesa estaba cometiendo actos de violencia a través de la financiación obtenida en la misma bolsa— permitió que la empresa minera violara los derechos humanos en Ecuador. Los tribunales de Ontario rechazaron este planteamiento, estipulando que ni la bolsa ni los directivos de Copper Mesa tenían la obligación legal de considerar los posibles daños a los demandantes durante el desarrollo de sus operaciones comerciales en Ecuador. Por otra parte, durante la limitada trayectoria del pleito, Copper Mesa perdió su cotización en la Bolsa de valores de Toronto y sus principales concesiones mineras en Ecuador fueron canceladas³⁹. Por consiguiente, se puede decir que, aunque no sea oficialmente, el pleito tuvo algún efecto.

Aunque en el caso de Intag los afectados tuvieron acceso a la ley tanto a nivel nacional como internacional, el uso de medidas legales está ligado a varias dificultades y obstáculos. En primer lugar, es una herramienta muy costosa para las comunidades en términos de tiempo y gastos de abogados; y el éxito depende de la independencia de los tribunales. Es evidente que las comunidades rurales, que son las más afectadas, tienen dificultades para obtener los recursos necesarios para enfrentarse a una empresa minera. En segundo lugar, la falta de independencia del sistema judicial ecuatoriano significa, por ejemplo, que los jueces pueden temer represalias por fallar en contra de los intereses extractivistas (= estatales) por miedo a perder su puesto. El tercer problema es la corrupción que prolifera en muchos países y que permite, por ejemplo, que las empresas compren la sentencia que les conviene pagando a los jueces. Las legislaciones obligatorias de debida diligencia, en materias humana y medioambiental, en el país de origen de las empresas mineras (Chile, Canadá), así como de las empresas proveedoras, podrían ser otra herramienta útil para prevenir los abusos de los derechos humanos y los daños medioambientales y para facilitar el acceso a la reparación de los actores locales.

³⁸ Rainforest Action Group (26 September 2020): “Major Legal Victory for Endemic Species in Ecuador: Rights of Nature Case”. <https://rainforestactiongroup.org/es/major-legal-victory-for-endemic-species-in-ecuador-rights-of-nature-case/>

³⁹ Mining Watch Canada (07.06.2011): “En búsqueda de justicia: víctimas de abusos de mineras recurren a los tribunales de Canadá”. <https://miningwatch.ca/blog/2011/6/6/courting-justice-victims-mining-abuses-sue-canada>

En el siguiente recuadro, Carlos Zorrilla ha esbozado aspectos importantes derivados de su experiencia y trabajo sobre la minería en Intag. Dichos aspectos hacen alusión a los criterios relacionados con el lugar que deben tenerse en cuenta cuando se obtienen minerales. Además hacen referencia a las normas procedimentales. Estos aspectos aportan importantes ideas para el debate en torno a la debida diligencia en materia ambiental que se retomarán en la conclusión.

Líneas rojas y requisitos a considerar en una evaluación de riesgos ambientales desde la perspectiva de la sociedad civil:

Carlos Zorrilla

Para proteger el medio ambiente, así como nuestro futuro climático global, y también para evitar las violaciones de los derechos humanos que a menudo se derivan de los daños medioambientales, deben existir líneas rojas más allá de las cuales se prohíba la extracción y compra de minerales, así como la inversión en dichos proyectos (las denominadas “No-Go-Zones”). **Más concretamente, la empresa debe resistirse a adquirir minerales:**

- cuando los minerales procedan de **zonas protegidas** a nivel nacional o subnacional, o de cualquier otra zona en la que las actividades extractivas estén prohibidas por la constitución y las leyes del país;
- cuando los minerales procedan de zonas **designadas por la UNESCO** como Patrimonio Natural de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Geoparques o Reservas de la Biosfera;
- cuando el país del posible emplazamiento de la mina no haya firmado **acuerdos regionales o internacionales** para proteger la naturaleza y mitigar la crisis climática, como el *Acuerdo de París*, el *Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica*, la *Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas* (EITI) y, a nivel regional, el *Acuerdo de Escazú*;⁴⁰
- cuando los sitios pueden definirse como **sitios de alta biodiversidad**, debido a su extraordinaria importancia biológica, incluyendo: a) los 36 focos (*hotspots*) de biodiversidad⁴¹; b) aquellos sitios designados por los gobiernos nacionales o subnacionales como áreas prioritarias para la conservación; c) los sitios que contienen especies endémicas o críticamente amenazadas de animales o plantas, según las listas rojas de la UICN; y d) los sitios donde hay remanentes de vegetación nativa representativa (por ejemplo, el Bosque Hambach);
- cuando las actividades propuestas, o en curso, afecten a **bienes culturales** designados por los gobiernos nacionales o subnacionales;
- en países que no son signatarios de **convenios regionales o internacionales** que garantizan la transparencia, la protección de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, o los derechos laborales, como los *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas*, la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, y el Convenio 169 de la OIT;
- cuando la empresa asociada no tenga un **historial limpio** en cuanto al respeto de los derechos humanos, cumplimiento de la legislación laboral o medioambiental, o cuando haya incurrido en

⁴⁰ Este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Medioambiental en América Latina y el Caribe es un tratado internacional para la protección del medioambiente en América Latina y el Caribe. Tras ser firmado por 24 países en 2018, actualmente cuenta con once ratificaciones.

⁴¹ Ver: Hotspot de Biodiversidad Andes Tropicales. <http://andestropicales.net/importancia/>

actos de corrupción, evasión fiscal y otras acciones u omisiones que supongan riesgos sociales o medioambientales.⁴²

En los siguientes casos, la empresa debe realizar **investigaciones exhaustivas antes de tomar la decisión de adquirir minerales** de estas zonas. Este es el caso:

- cuando los minerales proceden de **ecosistemas frágiles**, tal y como lo determina la legislación nacional o, mejor, una organización independiente. Se trata de lugares en los que una operación extractiva provoca impactos previsibles e irrevocables, como deforestación masiva, efectos sobre el clima (incluida la disminución de las precipitaciones); altos riesgos relacionados con la construcción de las infraestructuras necesarias (incluidos los pozos de relave; lugares conocidos de gran actividad sísmica, con topografía muy accidentada, o de alta pluviosidad). En este caso, la empresa debe verificar, con organizaciones independientes, cómo se puede lograr no impactar estos ecosistemas.
- cuando las actividades afecten negativamente a las estrategias nacionales y subnacionales de **mitigación del cambio climático** (por ejemplo, si se reduce la capacidad de los sumideros para almacenar CO₂);
- cuando la extracción y el procesamiento de metales corren un alto riesgo de causar una grave contaminación de los **recursos hídricos**, especialmente debido al **drenaje ácido de mina**, o cuando las actividades relacionadas con la extracción o el procesamiento de materiales amenazan con contaminar, o contaminan de hecho, la calidad o la cantidad de agua (superficial o subterránea) para uso humano (ya sea en los hogares o en la agricultura). La protección del agua es uno de los problemas más acuciantes del planeta, por lo que debe evaluarse si, aun con el uso de la mejor técnica disponible, los beneficios merecen los riesgos. Los proyectos mineros que afectan negativamente la calidad o cantidad del agua no sólo implican daños ecológicos y violaciones de los derechos de la naturaleza sino también, a mediano o largo plazo, de los derechos humanos.
- cuando las actividades amenazan con violar los **derechos de la naturaleza**. Cuando se sospecha que la actividad extractiva puede violar los derechos de la Naturaleza, una entidad independiente, que sea especializada en la materia, debe involucrarse para investigar el impacto.

Además de lo anterior, antes de adquirir materiales en las cadenas de suministro, las **empresas internacionales deben verificar** que los procesos se organicen de forma correcta:

- que se haya obtenido la aprobación de los **gobiernos subnacionales**, y que las actividades propuestas estén previstas en los planes de desarrollo de estos gobiernos (si no es así, la explotación puede interrumpir los planes de desarrollo regional y afectar a las zonas destinadas a la conservación);
- que haya **transparencia** por parte de la empresa; esto significa que toda la información necesaria para evaluar el cumplimiento de las obligaciones sociales y medioambientales de la empresa debe ser de libre acceso;

⁴² En el caso de Llurimagua, por ejemplo, son múltiples las irregularidades e ilegalidades detectadas por la Contraloría General del Estado en 2019, véase: La Hora (30.03.2019): "Contraloría detecta 12 irregularidades en el proyecto minero Llurimagua, en Intag". <https://www.lahora.com.ec/noticia/1102232695/contraloria-detecta-12-irregularidades-en-el-proyecto-minero-llurimagua-en-intag>

- que exista un mecanismo independiente para que la comunidad pueda **controlar** las actividades de la compañía. Se considera importante que las empresas permitan el total y libre acceso a los miembros de la comunidad o a personas o instituciones seleccionadas por las comunidades, incluyendo cualquier grupo comunitario que se oponga a la minería, a cualquier parte de la concesión minera y a áreas de operación para monitorear las conformidades adquiridas.

- que existan **auditorías** (reuniones mensuales o semestrales —según el voto de la comunidad— con las comunidades, gobiernos y organizaciones locales) para el diálogo continuo con los representantes de la comunidad en su conjunto para discutir los resultados del monitoreo comunitario y verificar que la actividad respeta los pactos o acuerdos empresa-comunidad y las líneas rojas acordadas en ellos; se sugiere que las comunidades cuenten con el apoyo de la Defensoría del Pueblo o una entidad similar;

- que exista un canal de comunicación directo y transparente para las **quejas o reclamaciones** de las comunidades hacia las empresas que obtienen los materiales, con el fin de denunciar cualquier problema (incluidos los obstáculos para acceder a las zonas mineras);

- que se haya realizado un **análisis independiente de costos y beneficios** del proyecto propuesto o en curso, el cual haya arrojado un resultado favorable para la explotación de minerales, en zonas de uso potencial para actividades ambientalmente sostenibles como el turismo de naturaleza.

Si no existen estos elementos y mecanismos, la empresa debe exigir su ejecución o implementación por parte de las entidades responsables, y desistir de adquirir minerales hasta que se hayan puesto en marcha.

9 Conclusión: lo que esto significa para las legislaciones de debida diligencia y las empresas

En casos como el de Llurimagua, en la región de Intag, se hace evidente que las operaciones mineras pueden tener graves impactos sobre el medioambiente y los derechos humanos. Al mismo tiempo se hace evidente, a partir del informe de la Contraloría General del Estado, que varias entidades del propio Estado ecuatoriano no han impedido que la ley nacional sea violada por la empresa conjunta entre ENAMI (su propia empresa nacional) y la corporación nacional chilena Codelco. Además, el mismo gobierno no ha cumplido con los deberes derivados de su propia legislación (Informe de la Contraloría General). Sin embargo, en tiempos de cadenas de suministro globales, cada vez hay más consenso en que también las empresas proveedoras tienen la responsabilidad de prevenir los daños. Desde 2011, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas los definen claramente para el caso de violaciones de los derechos humanos. En 2011, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales formularon, además, la responsabilidad que tienen las empresas en relación con el medioambiente, haciendo referencia a la Declaración de Río, la Convención de Aarhus y la Agenda 21.⁴³ Esta responsabilidad se especificó con más detalle en la Guía de Debita Diligencia de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable de 2018, que ofrece recomendaciones sobre cómo

⁴³ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2011): "OECD Guidelines for Multinational Enterprises". Paris: OECD. <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm>

aplicar las mencionadas Líneas Directrices de la OCDE de 2011. Sin embargo, el marco de la OCDE en materia de debida diligencia ambiental no está tan especificado como lo están los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos en materia de derechos humanos, y rara vez se ha integrado en las legislaciones de debida diligencia⁴⁴. Hasta la fecha las empresas pueden, en la mayoría de los casos, abastecerse de proyectos (como el de Llurimagua, si este fuese ejecutado) aunque sepan que la extracción causó graves daños ambientales sin apenas consecuencias (legales), aparte de los potenciales riesgos para la reputación. Esto puede llevar a la situación de que las empresas extractoras no se enfrenten a ninguna (o casi ninguna) presión de sus clientes y a abusar de la situación de falta de aplicación de la ley en materia de medioambiente, con graves consecuencias para este último y para la población local. Esto es especialmente relevante en los casos en los que el propio Estado y las correspondientes empresas estatales muestran un gran interés por los ingresos derivados de la mina. Como lo muestra este caso, los actores locales han tenido cierto éxito legal, incluso dentro de Ecuador, en relación con el derecho constitucional de la naturaleza a nivel cantonal. Sin embargo, el caso no se ha ganado a nivel nacional y existe una gran presión sobre los tribunales para que decidan a favor de los intereses empresariales y en contra de los derechos de la naturaleza. Como señalan Krebs et al (2020), la debida diligencia en materia de medioambiente podría, por lo menos, mejorar la aplicación de las legislaciones medioambientales nacionales en el lugar de extracción.⁴⁵ Por consiguiente, vamos a examinar a continuación más detenidamente el concepto de debida diligencia medioambiental.

>>La debida diligencia en materia de derechos humanos no es suficiente: se necesita una debida diligencia medioambiental explícita

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP) proporcionan un marco para que las empresas internacionales ejerzan la debida diligencia en todas sus operaciones mundiales en materia de derechos humanos. Esto ha sido la base de las legislaciones de debida diligencia en diferentes países. Pero este caso muestra específicamente que la debida diligencia en materia de derechos humanos, según los UNGP, debe ir acompañada de la debida diligencia medioambiental. Se demuestra, pues, que no es suficiente cuando la destrucción del medio ambiente es atendida únicamente en los casos en que se están causando directamente abusos de los derechos humanos, como sería en el caso de los UNGP por sí solos, sino que es necesario obligar a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia ambiental adicional. En consecuencia, sería necesario aplicar la debida diligencia medioambiental, entre otras cosas, para evitar la grave pérdida de biodiversidad a nivel mundial, algo a lo que se comprometieron los gobiernos a través del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Según estudios científicos y evaluaciones de impacto ambiental independientes, el proyecto causaría una deforestación masiva, una grave pérdida de biodiversidad que pondría en peligro a dos especies, un cambio previsto en el clima local, entre otras cosas.^{46 47} La pérdida de biodiversidad no está

⁴⁴ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2018): "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct". París: OECD. <https://www.oecd.org/investment/ue-diligence-guidance-for-responsible-businessconduct.htm>

⁴⁵ Krebs, D., Klinger, R., Galihofer, P., Scherf, S.C. (2020): „Von der menschenrechtlichen zur umweltbezogenen Sorgfaltspflicht. Aspekte zur Integration von Umweltbelangen in ein Gesetz für globale Wertschöpfungsketten“. Umweltbundesamt. P. 49. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbezogene-sorgfaltspflichten> (p 38)

⁴⁶ Brondizio, E. S., Settele, J., Díaz, S., & Ngo, H. T. (2019): "Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services". IPBES secretariat, Bonn. Ver también: Niranjana, A. (2019): "Der massive Verlust der Biodiversität ist für den Menschen so bedrohlich wie der Klimawandel". <https://www.dw.com/de/der-massive-verlust-der-biodiversität-ist-für-den-menschen-so-bedrohlich-wie-der-klimawandel/a-48614763>

⁴⁷ Además muestra que las condiciones geográficas con alta pluviosidad y la superabundancia del subsuelo, así como el riesgo de agua por los terremotos, suponen un alto riesgo para el drenaje ácido de las minas y para la contaminación de

directamente relacionada con abusos de los derechos humanos y, por tanto, no está cubierta por la debida diligencia en materia de derechos humanos. Sin embargo, la pérdida continuada de biodiversidad no solo supone enormes riesgos económicos para la empresa, sino que a no muy largo plazo socavaría nuestra capacidad para luchar contra la pobreza, nuestra seguridad alimentaria y del agua, la salud humana, siendo por todo ello necesario evitarla.⁴⁸ Existen diferentes convenios o acuerdos sobre aspectos medioambientales, como el Convenio sobre la Biodiversidad o el Acuerdo de París, que prescriben la protección de nuestro medioambiente o del clima, y también están las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011) y la Guía de Debita Diligencia de la OCDE para una Conducta Empresarial Responsable (2018) que señalan la responsabilidad de las empresas en este sentido. Sin embargo, la debida diligencia medioambiental y las responsabilidades de las corporaciones en esta materia deben ser definidas con mayor claridad.

>>Qué debe tenerse en cuenta al redactar la debida diligencia medioambiental

Además de demostrar la necesidad de integrar la debida diligencia medioambiental por separado en la legislación sobre la debida diligencia, y de seguir consensuándola, este estudio de caso también proporciona algunas ideas sobre los aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de seguir desarrollando el concepto de debida diligencia medioambiental:

- -El caso de Intag muestra que ciertas condiciones geológicas y climáticas, que favorecen acontecimientos como los terremotos y las altas precipitaciones, por ejemplo, pueden aumentar el riesgo de una grave destrucción del medioambiente causada por la minería y deben tomarse muy en serio. Por lo tanto es importante examinar las posibles zonas de extracción con respecto a las condiciones geológicas y climáticas antes de iniciar un proyecto minero. El proyecto de investigación de la Agencia del Medioambiente ha desarrollado una metodología de evaluación a propósito de los potenciales riesgos medioambientales que tiene la minería en el lugar en que se asienta⁴⁹, y presenta sugerencias concernientes a la selección de dichos lugares en este sentido. Esto podría servir de base para una debida diligencia en materia de medio ambiente, específicamente antes de iniciar un proyecto minero.
- Las diferentes líneas rojas y las cuestiones a tener en cuenta en el contexto de la debida diligencia medioambiental enumeradas anteriormente por Carlos Zorrilla, y que fueron redactadas a partir de su experiencia en el contexto de su trabajo para la ONG Decoin, son valiosas de tener en cuenta a la hora de redactar normas para la debida diligencia medioambiental. Además aportan ideas sobre cómo el seguimiento realizado por la comunidad puede contribuir a la debida diligencia ambiental ejecutada durante la fase de extracción. Desde esta perspectiva la debida diligencia ambiental, en casos graves, podría dar lugar a que ciertas actividades económicas sean consideradas como transgresoras de las líneas rojas establecidas en términos de riesgos medioambientales y, por tanto, no debieran ejecutarse.

las aguas subterráneas, los ríos y los arroyos. Estas son cuestiones que podrían considerarse líneas rojas para las operaciones mineras.

⁴⁸ La importancia de la biodiversidad, y el compromiso de luchar por ella, ha sido reafirmado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 15, el cual es dedicado a la biodiversidad.

⁴⁹ Dehoust; Günter; Manhart, Andreas; Dolega, Peter; Vogt, Regine; Kemper, Claudia et al.: (2020): "Environmental Criticality of Raw Materials. An assessment of environmental hazard potentials of raw materials from mining and recommendations for an ecological raw materials policy" (80) Umweltbundesamt.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-17_texte_80-2020_oekoressii_environmentalcriticality-report_.pdf Última revisión: 03.02.2021

- A la hora de evaluar el impacto medioambiental de una operación determinada resulta de especial relevancia que la población local del lugar de extracción forme parte de dicho proceso. Esta consulta significativa es exigida por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP - Principio 18) en el contexto de una evaluación de riesgo de derechos humanos y, al mismo tiempo, muchas legislaciones nacionales lo exigen en el contexto de un estudio de impacto medioambiental (así lo hace también Ecuador).⁵⁰ En este orden de ideas es importante que, en primer lugar, la población local tenga acceso a la información completa sobre el impacto de la operación en el ecosistema. Según este estudio, este no fue el caso en Intag y la posibilidad de que la población local reaccionara a la evaluación de impacto ambiental se vio disminuida al proporcionarse muy poco tiempo para responder a una gran cantidad de datos muy complejos.
- En segundo lugar, es importante que la información sea independiente y no sesgada. En la actualidad, la evaluación del impacto ambiental se considera en todo el mundo como la piedra angular de la evaluación ambiental al inicio de una operación. Este caso demuestra lo importante que es hacer una evaluación independiente sobre los impactos ambientales y respetar los estándares internacionales de buenas prácticas. La evaluación de impacto ambiental japonesa fue más independiente de lo que suelen ser las evaluaciones de esta clase, ya que en la mayoría de los casos son encargadas por las propias empresas⁵¹, y proporcionó información útil para que la población local conociera el impacto potencial de la operación. El acceso a evaluaciones científicas independientes resulta importante para que las comunidades locales puedan hacerse una imagen independiente del impacto que tendrá la operación en su territorio. En este caso, además, la información independiente permitió a los actores locales cuestionar las evaluaciones engañosas realizadas por la empresa ENAMI.
- Es fundamental que las comunidades puedan supervisar el impacto de la operación en el medioambiente y procesar sus resultados de supervisión en los mecanismos de reclamación de las empresas. Además es importante que estos mecanismos de reclamación estén constituidos de forma que las reclamaciones, también en lo que respecta a los daños medioambientales, se transmitan a lo largo de la cadena de suministro hacia los fabricantes u otros socios comerciales y que se les dé seguimiento.
- A la hora de definir la legislación en materia de debida diligencia medioambiental es esencial que se involucre a la población local de los lugares de extracción para evitar que los requisitos se formulen de manera que puedan resultar excluyentes para los mineros a pequeña escala, por ejemplo, de la cadena de suministro.

Procesos y documentos políticos, actuales y relevantes, en el contexto de la debida diligencia medioambiental

Como el Consejo Europeo acordó recientemente que Europa necesita trabajar en una Ley de Derechos Humanos y de Debida Diligencia Ambiental, y también el Comisionado de Justicia de la UE, Didier Reynders, anunció que dicha normativa se presentará a principios de 2021, ahora es el momento de seguir trabajando en el concepto de debida diligencia medioambiental. Esto también está respaldado por la medida 15 de la Estrategia Alemana de Materias Primas. En ella, el gobierno alemán se compromete a iniciar el desarrollo de una guía sobre la debida diligencia medioambiental en las cadenas de suministro de materias primas a través de un proceso internacional, "en analogía con la ya existente Guía de Debida Diligencia de la OCDE para las

⁵⁰ Defensoría del Pueblo de Ecuador: "Consentimiento libre, previo e informado en el Ecuador: Aportes al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas". https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EM-RIP/FPIC/Ecuador_NHRI.pdf p.9

⁵¹ UN Environment (Hg.) (2018): "Assessing Environmental Impacts - A Global Review of Legislation". <https://europa.eu/capacity4dev/unep/documents/assessing-environmental-impacts-global-review-legislation>

materias primas procedentes de zonas de conflicto", esto con el argumento de que "hasta ahora no existe ninguna orientación de la OCDE sobre la debida diligencia en materia medioambiental".⁵² Los aspectos expuestos anteriormente deben ser, pues, tenidos en cuenta. Más aún, una serie de estudios de la Agencia Alemana de Medio Ambiente⁵³, la Iniciativa Lieferkettengesetz⁵⁴, y un documento mucho más conceptual de Germanwatch⁵⁵ proporcionan puntos de partida valiosos y relevantes. Otros aspectos relevantes derivados de este estudio de caso, en relación con la responsabilidad de las empresas, pueden encontrarse en el siguiente recuadro.

¿Qué podría significar la debida diligencia medioambiental para la industria europea?

A: Las empresas de abastecimiento como las fundiciones y los fabricantes:

Este caso demuestra, una vez más, que las enormes repercusiones medioambientales y sociales de un proyecto minero se producen al principio de la explotación, cuando aún no se han establecido los contratos de suministro con las empresas de abastecimiento de Europa y de otros lugares. Esto dificulta que las empresas que compran materias primas puedan influir directamente en el proceso de construcción de la mina. Dicho esto, se pone de manifiesto la importancia de que las empresas evalúen la procedencia de sus materias primas y que tengan en cuenta los impactos de la fase de inicio y construcción de una mina a la hora de elegir sus materias primas. Esto debería incluir una definición de las líneas rojas, por ejemplo, en relación con los requisitos de los estudios de impacto ambiental (véanse además las líneas rojas planteadas por Carlos Zorrilla en el recuadro previo).⁵⁶ Esto es especialmente relevante para las fundiciones, que compran concentrados y tienen relaciones directas de suministro con la mina. Además es importante que los fundidores den a conocer la procedencia de su material, para que las empresas que están más abajo en la cadena de suministro puedan hacer su propia evaluación. Las cooperaciones entre fabricantes, como el sector automovilístico alemán y las minas, podrían ser, además, una forma para que los fabricantes intenten ejercer cierta influencia en el impacto de la extracción.

⁵² BMWI (2020): "Rohstoffstrategie der Bundesregierung. Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nicht-energetischen mineralischen Rohstoffen". p. 33. <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/PR/rohstoffstrategie-der-bundesregierung.html>

⁵³ Krebs, D., Klinger, R., Galihofer, P., Scherf, S.C. (2020): "Von der menschenrechtlichen zur umweltbezogenen Sorgfaltspflicht. Aspekte zur Integration von Umweltbelangen in ein Gesetz für globale Wertschöpfungsketten". Umweltbundesamt. P. 49. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbezogene-sorgfaltspflichten>. Ver también: Dehoust, G., Manhart, A., Schmidt, G., Vogt, R., Kämper, C., Giegrich, G. et al. (2017): "Erörterung ökologischer Grenzen der Primärrohstoffgewinnung und Entwicklung einer Methode zur Bewertung der ökologischen Rohstoffverfügbarkeit zur Weiterentwicklung des Kritikalitätskonzeptes (ÖkoRess I). Methode für einen standortbezogenen Ansatz" Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-09-28_texte_87-2017_oeko-ress_standortbezogene_bewertung_1.pdf Ver también: Dehoust, G., Manhart, A., Dolega, P., Vogt, R., Auberger, A., Kämper, C. et al. (2020): "Weiterentwicklung von Handlungsoptionen einer ökologischen Rohstoffpolitik (ÖkoRess II.)". Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/oekoress-ii>

⁵⁴ Henn, E. & John, J. (2020): "RECHTSGUTACHTEN ZUR AUSGESTALTUNG EINER UMWELTBEZOGENEN SORGFALTSPFLICHT IN EINEM LIEFERKETTENGESETZ". BUND, Greenpeace, DUH. https://lieferkettengesetz.de/wpcontent/uploads/2020/07/lieferkettengesetz_rechtsgutachten_umwelt.pdf

⁵⁵ Germanwatch (2021): "Über die Notwendigkeit und Wirkung umweltbezogener Sorgfaltspflichten: Ein Beitrag zur Diskussion im Rahmen eines deutschen und europäischen Lieferkettengesetzes". <https://germanwatch.org/de/19841>

⁵⁶ También los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs) prevén la definición de estas líneas rojas.

B: Empresas que suministran equipos para la explotación:

La industria alemana es un importante productor de maquinaria para diferentes actividades económicas como la minería. La Cámara de Comercio Alemana, por ejemplo, incluso ha anunciado explícitamente el potencial económico del sector minero ecuatoriano para las empresas alemanas.⁵⁷ Parte de la debida diligencia de las empresas, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, es evitar que el uso de sus productos conduzca a la violación de los derechos humanos. De forma análoga, los fabricantes de maquinaria deberían hacer lo mismo en materia de medioambiente.

Este estudio de caso demostró una vez más que los riesgos medioambientales fueron evaluados de forma diferente por los distintos estudios de impacto medioambiental (dependiendo del cliente). Las normas y reglamentos sobre la metodología y el contenido de las evaluaciones de impacto ambiental no están reguladas de manera uniforme a nivel internacional, lo que significa que los estudios no son comparables en términos de calidad e importancia.⁵⁸ Aquí es donde las empresas pueden empezar a ejercer la debida diligencia medioambiental, vinculando contratos de suministro al cumplimiento de los criterios de calidad y los requisitos mínimos de las evaluaciones de impacto ambiental, así como con las consiguientes medidas de protección que deben aplicarse. Además, la población afectada debe ser informada sobre los riesgos ambientales y sociales del proyecto de forma exhaustiva y en un lenguaje contextualizado. Así mismo la población debe participar en la toma de decisiones.

La debida diligencia en materia de medio ambiente, llevada a cabo por los fabricantes alemanes de maquinaria, podría tener una importante influencia en el sector minero mundial en cuanto a la protección del medio ambiente se refiere (por ejemplo en temáticas como biodiversidad y clima). Esto se debe a que la realización técnica de las operaciones mineras en todo el mundo depende de la tecnología de ingeniería alemana a gran escala.⁵⁹ Para sus minas chilenas, Codelco tiene contratos de mantenimiento millonarios con Siemens⁶⁰ y se abastece de la empresa de ingeniería Herrenknecht.⁶¹

⁵⁷ AHK Deutsch-Ecuadorianische Industrie- und Handelskammer: "Bergbau in Ecuador". <https://ecuador.ahk.de/kompetenzfelder/bergbau-in-ecuador>

⁵⁸ UN Environment (2018): "Assessing Environmental Impacts- A Global Review of Legislation". Nairobi, Kenya. <https://europa.eu/capacity4dev/unep/documents/assessing-environmental-impacts-global-review-legislation>

⁵⁹ GENIOS (2017): "Goldgräberstimmung im Bergbau – Deutsche Maschinen weltweit gefragt". http://www.genios.de/branchen/goldgr_berstimmung_im_bergbau_deutsche/s_mas_20070123.html

⁶⁰ Forum Vision Instandhaltung e.V. (2012): "Siemens erhält Instandhaltungsauftrag für chilenische Kupfermine". <https://www.ipih.de/artikel/9373>

⁶¹ International Mining (2020): "DMC Mining invests in new Sandvik, Herrenknecht equipment for Chile Projects". <https://im-mining.com/2020/04/15/dmc-mining-invests-new-sandvik-herrenknecht-equipment-chile-projects/> También ver: International Mining (2007): "Codelco goes for German mining technology". <https://im-mining.com/2007/07/25/codelcogoes-for-german-mining-technology/>

Para más información:

The World Bank Extractive Industries Review

https://lawweb.colorado.edu/profiles/syllabi/banks/EIR%20vol1_eng.pdf

Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable

<http://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conductaempresarial-responsable.pdf>

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

<https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/mining.htm>

The WORLD BANK Environmental and Social Framework

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-Framework.pdf>

Licencia de perforación:

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/514571530085582916/pdf/License-to-drill-a-manual-on-integrity-due-diligence-for-licensing-in-extractive-sectors.pdf>

Corruption in the extractive value chain: typology of risks, mitigation measures and incentives

<https://www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf>

Findings from the World Bank Due Diligence Pilot on Private Sector TF and EFO Donors

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/920481468188353813/pdf/99059-BRI-IFC-SMART-LESSONS-Box393181B-PUBLIC-20150818T095935-2015-Due-Diligence-Pilot-D.pdf>



GERMANWATCH

Observar. Analizar. Actuar. Bajo este lema Germanwatch promueve activamente la equidad global y la preservación de los medios de vida desde 1991. Nos centramos en la política y la economía del Norte Global y sus repercusiones en todo el mundo. La situación de las personas especialmente desfavorecidas en el Sur Global es el punto de partida de nuestro trabajo. Junto con nuestros socios, donantes y otros actores de la sociedad civil, queremos ser un lobby fuerte en búsqueda de un desarrollo sostenible. Para ello abogamos por la prevención de un cambio climático que llegue a ser peligroso y sus efectos negativos, por la garantía de la seguridad alimentaria y por el cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de las empresas.

OFICINA EN BONN

Kaiserstr. 201

D-53113 Bonn

☎ +49 (0)228 / 60 492-0, Fax -19

OFICINA EN BERLIN

Stresemannstr. 72

D-10963 Berlin

☎ +49 (0)30 / 28 88 356-0, Fax -1

info@germanwatch.org

www.germanwatch.org



FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL

La Fundación Heinrich Böll es una fundación política sin fines de lucro cercana al partido alemán Alianza 90/ Los Verdes. Con el fin de incentivar la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana y el entendimiento internacional; nuestro trabajo se centra en fomentar los valores políticos de la ecología y el desarrollo sustentable, los derechos de las mujeres y democracia de género, democracia y ciudadanía, diversidad de medios y una opinión pública crítica, integración económica, globalización y re-regulación. Además, la Fundación Heinrich Böll promueve el arte y la cultura, la ciencia e investigación y el desarrollo internacional.

CONTACTO

Florian Huber, Representante | Cra. 37 No. 15-40, Bogotá | florian.huber@co.boell.org



DECOIN

DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) se fundó en enero de 1995 como una organización medioambiental de base para encontrar formas de conservar la biodiversidad única de la zona de Intag, en el noroeste de Ecuador. Todos los miembros de DECOIN viven permanentemente en la zona de Intag. La zona forma parte de dos de las regiones bióticas más importantes del mundo: los Andes Tropicales y los focos biológicos del Chocó-Darién oeste-ecuatoriano. Abarca varias zonas de vida, como los bosques húmedos tropicales y los bosques nublados. Una de las principales razones para la creación de DECOIN fue hacer frente a un proyecto minero a gran escala que todavía amenaza con destruir el medio ambiente de Intag y sus comunidades, así como el ejemplo de desarrollo sostenible que allí se está creando. Las principales áreas de trabajo de la ONG son la conservación directa, el apoyo al desarrollo sostenible, educación ambiental, y recursos legales contra la pérdida de biodiversidad.

CONTACTO

DECOIN

PO Box 144 Otavalo, Imbabura, Ecuador

(Oficina situada en la calle principal de Apuela, a 2.5 horas de Otavalo.)

☎ +593 6 264 8593

+593 6 264 8723

Español: decointag@gmail.com

English: toisan06@gmail.com

www.decoin.org

¿ENCONTRASTE ESTA PUBLICACIÓN INTERESANTE Y ÚTIL?

Puedes apoyar el trabajo de
Germanwatch con una donación a:

Bank fuer Sozialwirtschaft AG

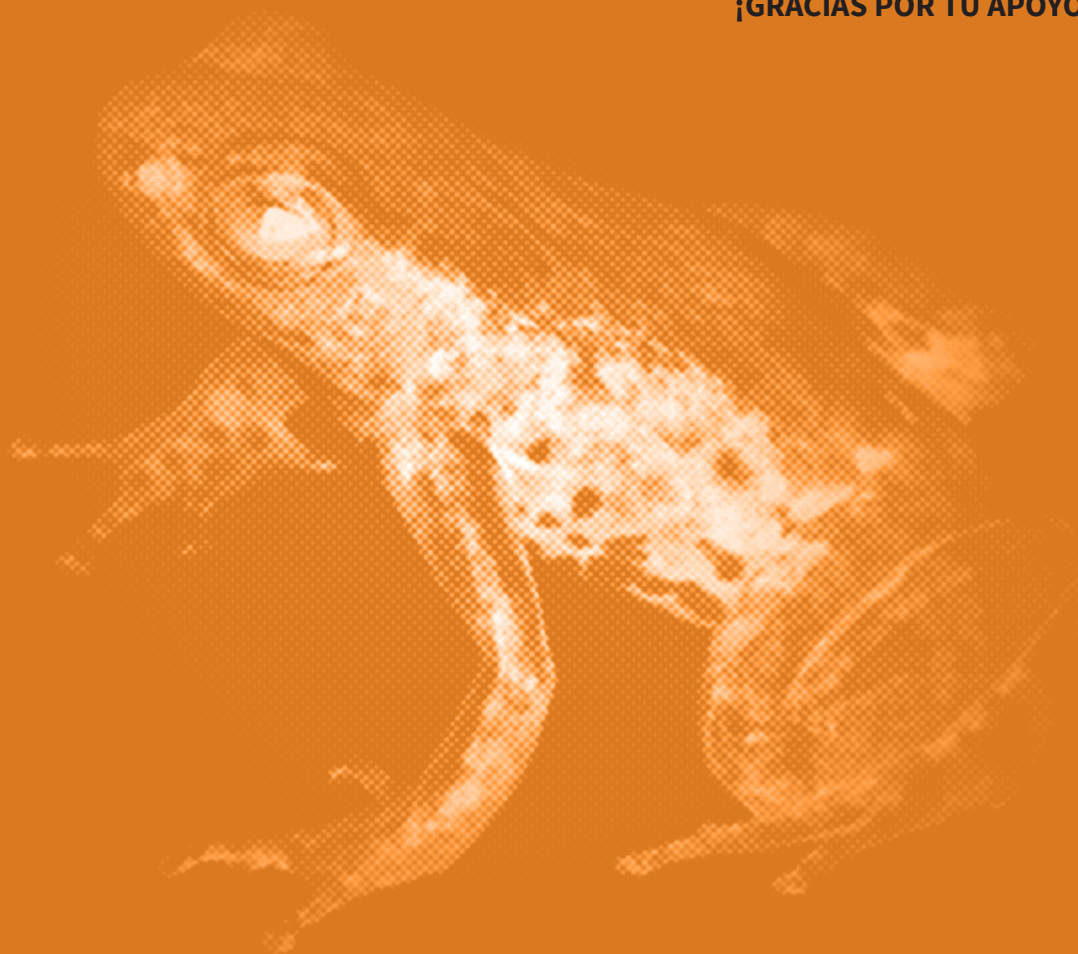
BIC/Swift

BFSWDE33BER

IBAN

DE33 1002 0500 0003 212300

¡GRACIAS POR TU APOYO!



Observar. Analizar. Actuar.

Para la equidad global y la preservación de los medios de vida.